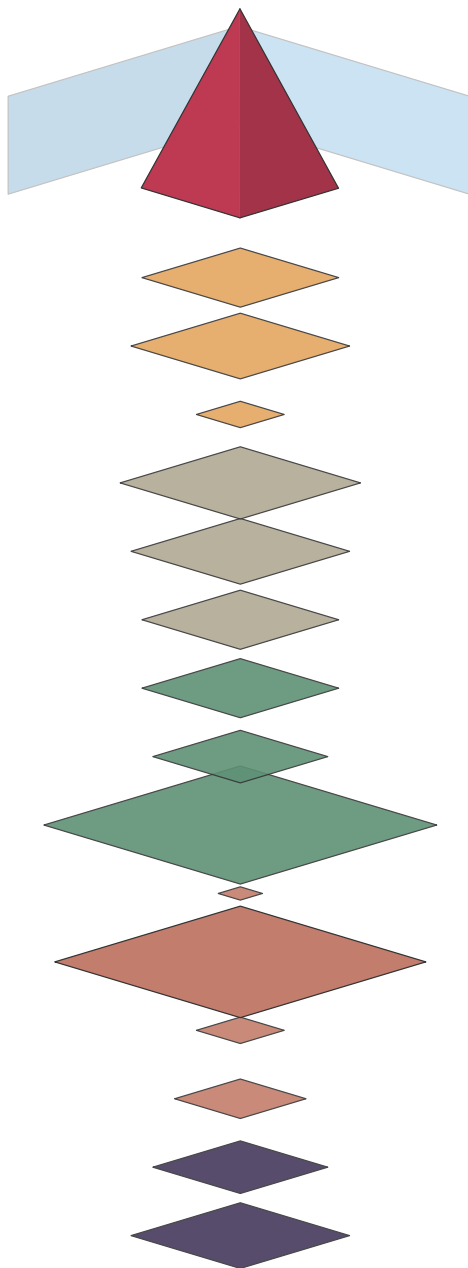




SURINAM



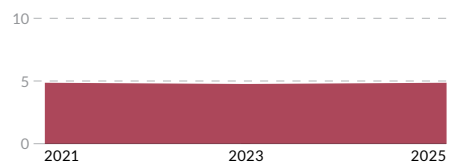
4.90 $\nearrow 0.13$

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

109.º de 193 pays $\nearrow 6$

24.º de 35 países americanos -

11.º de 12 países de América del Sur -



MERCADOS CRIMINALES

4.50 $\searrow 0.03$

TRATA DE PERSONAS	4.50 $\nearrow 0.50$
TRÁFICO DE PERSONAS	5.00 0.00
EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN	2.00 $\searrow 1.00$
TRÁFICO DE ARMAS	5.50 0.00
COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS	5.00 0.00
COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES	4.50 $\nearrow 0.50$
DELITOS CONTRA LA FLORA	4.50 0.00
DELITOS CONTRA LA FAUNA	4.00 0.00
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES	9.00 $\nearrow 0.50$
COMERCIO DE HEROÍNA	1.00 $\searrow 0.50$
COMERCIO DE COCAÍNA	8.50 0.00
COMERCIO DE CANNABIS	2.00 0.00
COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS	3.00 0.00
DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA	4.00 $\searrow 1.00$
DELITOS FINANCIEROS	5.00 $\nearrow 0.50$



ACTORES CRIMINALES

5.30 $\nearrow 0.30$

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO	3.00 0.00
REDES CRIMINALES	5.00 0.00
ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO	8.50 $\nearrow 1.00$
ACTORES EXTRANJEROS	6.00 $\nearrow 0.50$
ACTORES DEL SECTOR PRIVADO	4.00 0.00



Financiamiento
proporcionado por
el Gobierno de los
Estados Unidos.

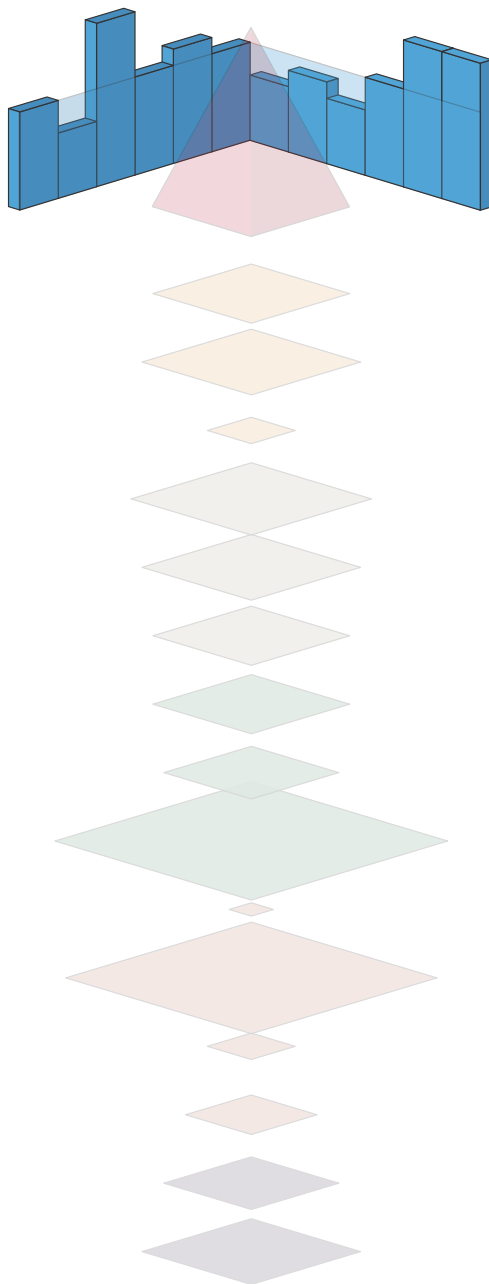


Funded by
the European Union

ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.



SURINAM



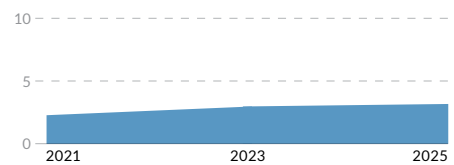
3.17 $\nearrow 0.13$

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

161.º de 193 países $\nearrow 9$

32.º de 35 países americanos -

11.º de 12 países de América del Sur -



LIDERAZGO POLÍTICO
Y GOBERNANZA **3.00** 0.00

TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL
Y RENDICIÓN DE CUENTAS **2.00** 0.00

COOPERACIÓN INTERNACIONAL **5.00** $\nearrow 0.50$

POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES **3.00** $\searrow 0.50$

SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN **3.50** $\nearrow 0.50$

CUERPOS DE SEGURIDAD **3.00** 0.00

INTEGRIDAD TERRITORIAL **2.00** 0.00

LUCHA CONTRA
EL LAVADO DE DINERO **2.50** $\nearrow 0.50$

CAPACIDAD DE REGULACIÓN
ECONÓMICA **2.00** 0.00

APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS **3.00** 0.00

PREVENCIÓN **4.50** $\searrow 0.50$

ACTORES NO ESTATALES **4.50** $\nearrow 1.00$



Financiamiento
proporcionado por
el Gobierno de los
Estados Unidos.



Funded by
the European Union

ENACT es un programa financiado por
la Unión Europea e implementado por el
Institute for Security Studies e INTERPOL,
en asociación con Global Initiative Against
Transnational Organized Crime.

CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

Surinam sigue siendo un país de tránsito y de destino para las víctimas nacionales y extranjeras de la trata de personas, gracias al terreno boscoso del país y a la porosidad de sus fronteras. Las víctimas proceden sobre todo de Venezuela, Haití, Brasil, Cuba y Asia. Los migrantes irregulares son los más vulnerables: a las mujeres las explotan sexualmente en los burdeles y en las minas de oro, mientras que los hombres y los niños sufren explotación laboral en la agricultura, la construcción y la minería. Los traficantes surinameses operan principalmente a nivel nacional, mientras que los actores extranjeros de los países vecinos y de Asia, en particular de China, participan cada vez más en la explotación laboral y sexual. Esto se ha hecho más visible y generalizado con el aumento del número de mineros chinos, muchos de los cuales se ven atrapados en la servidumbre por deudas.

Surinam funciona principalmente como país de tránsito para el tráfico de personas en la región, impulsado por la migración constante y por las mínimas barreras de entrada. La mayoría de los migrantes irregulares permanecen en el país cuando finalizan sus visados de turista. Debido a la inestabilidad de su país de origen, los ciudadanos haitianos suelen recurrir a los servicios de traficantes, en particular a grupos extranjeros de tipo mafioso. A pesar de los recientes esfuerzos por frenar el tráfico, el control fronterizo se sigue viendo comprometido por la corrupción de la Policía, las aduanas y los funcionarios fronterizos. El tráfico ilegal a lo largo de la frontera del río Maroni tiene como objetivo principal acceder a las minas de oro de la Guayana Francesa, en coordinación con los mineros brasileños y los cimarrones locales, más que con unas organizaciones criminales estructuradas. La vigilancia insuficiente y las recientes restricciones en materia de visados dificultan tanto una estimación precisa de la cantidad de víctimas como la eficacia de las intervenciones. Surinam tiene un mercado limitado de extorsión y cobros ilegales por protección y de vez en cuando se producen en el país algunos incidentes de extorsión, sobre todo en los asentamientos de extracción de oro.

TRÁFICO

Surinam también funciona como un país de tránsito para el tráfico de armas en la región y recibe, sobre todo, armas de fuego procedentes de Brasil y de Estados Unidos. El suministro interno de armas de fuego ilícitas proviene del desvío de las reservas nacionales, la propiedad civil, la producción artesanal y la recirculación. Las armas de fuego ilícitas se suelen adquirir como medida de protección, para cometer delitos y por motivos económicos. Las rutas del

contrabando de armas están controladas por redes criminales, como los grupos extranjeros vinculados al tráfico de cocaína. La corrupción de los cuerpos de seguridad y las oficinas públicas ha facilitado el tráfico e incluye la participación de los militares en las organizaciones criminales brasileñas.

Surinam ha experimentado una afluencia de productos falsificados, como medicamentos, recambios de automóviles y cosméticos, la mayoría de los cuales proceden de China y, en menor cantidad, de Brasil. Les facilitan la entrada los escasos controles aduaneros en los puertos marítimos y la corrupción de los funcionarios de aduanas. Estos artículos falsificados están muy extendidos en los mercados callejeros y en los almacenes y las tiendas con propietarios chinos. Debido a la preocupación por la autenticidad y la calidad, los talleres de automóviles legítimos eluden cada vez más las cadenas de suministro locales y se abastecen de recambios que proceden directamente de los Países Bajos.

El país es un lugar tanto de destino como de tránsito de productos sujetos a impuestos especiales y hay organizaciones criminales que se dedican al contrabando de tabaco y otros artículos entre Paraguay, Guyana y Brasil. Paraguay, por ejemplo, suministra la mitad del tabaco que circula en Surinam y los barcos brasileños introducen ilegalmente mercancías en el país. Algunos grupos surinameses transportan a los países vecinos productos sujetos a impuestos especiales, como alimentos, alcohol y suministros mineros. El río Maroni es un corredor clave para el contrabando hacia las explotaciones mineras ilegales de la Guayana Francesa. Aunque generan pocos beneficios, estas operaciones logísticas ofrecen salidas diarias en canoa desde Surinam.

MEDIOAMBIENTE

Las actividades no reguladas y la limitada supervisión en las zonas del interior favorecen la tala ilegal y provocan una deforestación importante. Las empresas extranjeras, principalmente chinas y malasias, dominan las concesiones madereras y la madera ilegal se vende a menudo en Internet, lo que dificulta su rastreo. Las redes del crimen organizado explotan los recursos madereros, a veces con la ayuda de funcionarios corruptos. Las comunidades cimarronas autóctonas marginadas, que carecen de apoyo estatal, recurren con frecuencia a la tala no autorizada para sobrevivir, mientras que los líderes locales ceden los derechos sobre la tierra a cambio de compensaciones económicas, a menudo en beneficio propio. A pesar de las resoluciones internacionales, continúa la tala no autorizada en las tierras de los saamaka, lo que provoca la degradación de los bosques.

Surinam es un país de origen para el tráfico de especies silvestres, sobre todo jaguares y pájaros cantores, que responde a la demanda externa. El tráfico de jaguares para

los mercados de la medicina tradicional en China es muy rentable, ya que la grasa de jaguar alcanza precios elevados. Incentivados por las redes criminales vinculadas a políticos corruptos, los cazadores locales están pasando de la caza de subsistencia a la comercial. Las organizaciones criminales chinas explotan a los cazadores locales y forman parte de unas redes de tráfico más amplias que operan en Bolivia y en el Sudeste Asiático.

En el sector de la minería del oro de Surinam, uno de los principales motores económicos, abundan la minería ilegal y el contrabando, impulsados por unos tipos impositivos más bajos que los de los países vecinos. Esto ha convertido a Surinam en un lugar de tránsito clave para el oro de contrabando procedente de la Guayana Francesa, Brasil, Guyana y Venezuela. La región del río Lawa, en la frontera con la Guayana Francesa, es un foco importante de actividades mineras ilegales. Se calcula que casi la mitad del oro producido ilegalmente en la Guayana Francesa pasa por las rutas de contrabando organizadas hasta Paramaribo sin ninguna supervisión. Las comunidades cimarronas autóctonas y los mineros brasileños dominan las operaciones ilegales, que generan retos sociales y medioambientales. Según los informes, en estas actividades también participan redes criminales transnacionales y actores comerciales extranjeros, como los miembros del Primeiro Comando da Capital de Brasil y los comerciantes chinos. Las discrepancias en los datos sobre la exportación indican que no se informa lo suficiente. Estos problemas se ven agravados por la corrupción sistémica, ya que, según los informes, hay altos funcionarios del Gobierno que se benefician de las operaciones ilegales de extracción de oro, lo que facilita el contrabando hacia los países vecinos, donde hay menos marcos normativos o los derechos de explotación son más bajos. El contrabando de mercurio y el de combustible también aumentan los riesgos para la salud y el medioambiente.

DROGAS

Surinam se ha consolidado como un importante lugar de tránsito de la cocaína hacia América del Norte y Europa, aunque el consumo local es limitado. La droga entra sobre todo en aviones privados procedentes de Colombia y de Venezuela o en «mulas» en los vuelos comerciales, a pesar de las medidas represivas de los países vecinos. La corrupción de los cuerpos de seguridad facilita el uso de rutas terrestres establecidas desde Colombia, Venezuela y Guyana, especialmente en la frontera del Maroni. Una vez en Surinam, la cocaína se oculta en contenedores o en submarinos y se envía a Europa, ya sea directamente o con escalas intermedias, como la Guayana Francesa y Martinica. Las redes criminales locales colaboran con grupos colombianos, brasileños y venezolanos y aprovechan la corrupción generalizada de los cuerpos de seguridad y de algunas de las principales élites del país, con lo cual el tráfico continúa, a pesar de que se han tomado medidas limitadas para contrarrestarlo.

El mercado del cannabis es reducido, en comparación con el de los países vecinos, y el suministro procede de la Guayana Francesa y de Brasil, gracias a unas prácticas aduaneras corruptas. Algunos factores externos, como la influencia de las redes organizadas de contrabando y la insuficiencia de los controles internos, contribuyen a que el país sea un canal para el tráfico de cannabis.

Al parecer, el tráfico de drogas sintéticas es limitado en Surinam. Sin embargo, hay indicios de que entran en el país para ser introducidas de contrabando en los países vecinos y, posteriormente, en Estados Unidos y en Canadá. La mayoría de los traficantes son actores extranjeros que operan en los Países Bajos, donde las drogas se producen y se envían. No hay pruebas de que Surinam tenga un mercado consolidado de heroína ni de que existan actividades ilícitas ni organizaciones delictivas relacionadas con la heroína.

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA

A pesar de que el país ha sufrido varios ciberataques, no ha habido un patrón constante o prolongado de este tipo de ataques. Por lo tanto, no hay pruebas suficientes para concluir que Surinam tiene un mercado bien establecido de delitos dependientes de la cibernética, aunque las limitaciones de los sistemas de ciberseguridad del país lo hacen vulnerable.

DELITOS FINANCIEROS

Surinam tiene un mercado consolidado de delitos financieros y hay una corrupción generalizada del sector público. Los casos de alto nivel implican malversación y uso indebido de fondos, a menudo vinculados a empresas privadas e internacionales, a través de contratos públicos manipulados. La evasión fiscal también está muy extendida y en ella participan tanto los cárteles organizados como los actores económicos individuales, especialmente en el sector de la exportación de oro. Las presiones económicas externas aumentan los riesgos, atraen la atención internacional y ponen de relieve las vulnerabilidades sistémicas.

ACTORES CRIMINALES

Los grupos de tipo mafioso de Surinam siguen pasando desapercibidos en gran medida, ya que no hay organizaciones sumamente poderosas ni bien estructuradas que dominen los mercados criminales del país. No existen enclaves delictivos, a pesar de que el territorio, cubierto por una selva espesa, permite una mayor concentración de actividades ilícitas y de grupos delictivos. Los pocos grupos de tipo mafioso que existen en Surinam son jerárquicos y reducidos y están controlados por unos pocos líderes claves del Gobierno, el Ejército y la Policía.

Las redes criminales están bastante activas en el panorama del crimen organizado de Surinam, cada una con dimensiones transnacionales y vulnerabilidades sistémicas. Los grupos transnacionales relacionados con las fronteras colaboran con sus homólogos brasileños y guyaneses, se dedican al tráfico de armas y al comercio ilícito de oro y mercurio y utilizan los sistemas de pago brasileños para blanquear las ganancias. Las redes de contrabando entre amigos transportan productos ilegales, como pasta de jaguar y drogas, y operan tanto a nivel nacional como internacional, con conexiones con los Países Bajos. Se identificaron organizaciones de contrabando de cocaína muy estructuradas como los principales actores que gestionan el transporte de la cocaína a Europa, que dependen cada vez más de los residentes de la Guayana Francesa, ya que las operaciones con «mulas» atraen una seguridad más estricta. Las redes de lavado de dinero están vinculadas a las élites políticas y las administraciones anteriores han estado involucradas en la corrupción.

El panorama del crimen organizado de Surinam se caracteriza por la corrupción sistémica en la que están involucradas figuras políticas influyentes y los actores integrados en las instituciones públicas. Hay implicados altos funcionarios en graves denuncias penales y el poder político se ha consolidado mediante nombramientos estratégicos y el control de los sectores rentables, como la minería del oro. En ocasiones se han aprovechado iniciativas comunitarias para reforzar la influencia política. El legado de los antiguos dirigentes sigue planteando retos de gobernanza muy arraigados, porque refuerza los vínculos entre las redes criminales y los elementos dentro del Estado. En el tráfico ilícito de oro aún predominan las prácticas corruptas, en las que hay implicadas entidades extranjeras, como algunas empresas chinas y otras que tienen sede en Dubái, además de los dirigentes del país. La transparencia brilla por su ausencia en los acuerdos con las empresas mineras extranjeras. Aunque reconoce el alcance de la corrupción, la administración actual no se enfrenta a

los funcionarios, debido a la importancia económica de la minería informal del oro, que emplea a una parte significativa de la población y domina las exportaciones.

Surinam funciona como un centro de reexpedición fundamental para el tráfico de drogas entre América Latina y Europa, lo que atrae a diversas organizaciones criminales extranjeras procedentes de Colombia, Brasil, Bolivia, Perú y las Guayanas. La situación estratégica del país facilita la prolongada cooperación entre grupos surinameses y colombianos, que siempre han estado vinculados a las principales redes del narcotráfico. Las organizaciones criminales brasileñas extienden su influencia, más allá del tráfico de drogas, a las operaciones mineras ilícitas y controlan partes importantes de las economías tanto selváticas como urbanas. Algunos antiguos insurgentes colombianos también se han instalado en Surinam. Además, los actores chinos del sector privado desempeñan un papel central en la economía ilícita de Surinam, en particular en el comercio ilegal de oro, mercurio, cianuro y productos de especies silvestres, aprovechando las lagunas normativas y las conexiones transnacionales, hacia destinos asiáticos. Las empresas multinacionales también utilizan su considerable poder económico para influir en las políticas públicas y para aprovechar las lagunas normativas para obtener condiciones favorables.

La participación del sector privado en el panorama del crimen organizado de Surinam es moderada, aunque más pronunciada en los sectores minero y aurífero. Las empresas mineras subcontratan a mineros artesanales, eludiendo así su responsabilidad jurídica. Persiste la explotación ilegal de la flora, debido a la laxitud de la normativa, y las empresas obtienen concesiones a expensas de las comunidades indígenas. Los clubes privados y las empresas de construcción que contratan mano de obra extranjera de manera informal facilitan el tráfico de personas, lo que pone de relieve la interacción entre el poder económico, las lagunas normativas y las influencias transnacionales para fomentar el crimen organizado.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

Surinam enfrenta retos constantes en materia de gobernanza, crimen organizado y calidad normativa, a pesar del cambio de gobierno que tuvo lugar durante el período que abarca el informe. Los procesos electorales se ajustan bastante a las normas internacionales. Sin embargo, persisten las desigualdades en el tamaño de los distritos y los datos demográficos obsoletos y el sistema electoral ha sido declarado inconstitucional. La eficacia de la gobernanza sigue siendo baja y la corrupción generalizada, el clientelismo y la implicación del Estado en el sector aurífero debilitan los

esfuerzos normativos. El crimen organizado, en particular el tráfico de drogas y el de armas, se infiltra en los sistemas políticos y en los cuerpos de seguridad, lo que agrava los problemas de gobernanza.

Surinam se enfrenta a una corrupción generalizada y, aunque ha creado una comisión anticorrupción durante el período que abarca el informe, los avances son limitados. La mayoría de los casos de corrupción no se detectan ni se persiguen. La transparencia sigue siendo un problema importante, especialmente en sectores clave, como la

minería, donde los acuerdos recientes no incluían la difusión pública. El país carece de una legislación que garantice el acceso a la información pública, lo que contribuye a su baja puntuación en materia de transparencia y dificulta la rendición de cuentas. Los marcos jurídicos y normativos obsoletos agravan aún más los retos de gobernanza, aunque la actual administración se ha comprometido a mejorar la transparencia en las licitaciones públicas. Entre las medidas recientes figuran la obligación de que los ministros revelen su información financiera y la celebración de conferencias de prensa periódicas, pero su aplicación sigue siendo irregular, lo que deja lagunas que permiten que los delitos financieros persistan sin tener consecuencias. La histórica condena del expresidente sería un cambio preliminar hacia la rendición de cuentas, pero prevalecen las debilidades institucionales y la presencia de la delincuencia.

El país ha ratificado la mayoría de los principales convenios internacionales sobre crimen organizado, excepto el Protocolo sobre Armas de Fuego y la Convención Única sobre Estupefacentes. Durante el período que abarca el informe, reforzó la cooperación bilateral y la regional, ha firmado acuerdos con Brasil, Guyana y la Guayana Francesa y ha participado en los mecanismos de la Comunidad del Caribe para combatir la criminalidad transnacional. Las iniciativas conjuntas en materia de seguridad incluyen el intercambio de información y las operaciones contra el narcotráfico. Estados Unidos ha proporcionado asistencia financiera y técnica para mejorar la seguridad fronteriza y la aérea. Surinam colabora con las Naciones Unidas en la detección de las armas de fuego ilícitas y aplica un programa de control de contenedores para frenar el tráfico.

El marco jurídico de Surinam para hacer frente al crimen organizado está obsoleto, ya que en las últimas décadas se han introducido pocas actualizaciones o modificaciones, lo que ha dado lugar a una aplicación y un cumplimiento inadecuados. En consecuencia, las investigaciones, los procesamientos y las condenas por este tipo de delitos siguen siendo escasos. Existe una reglamentación forestal, que incluye medidas para la tala sostenible y la protección de la biodiversidad, pero apenas se aplica y las sanciones no son demasiado severas, sobre todo en cuanto al tráfico de especies silvestres. Si bien las leyes contra la trata de personas incluyen duras sanciones, persisten las deficiencias en la aplicación de la ley. El Gobierno ha elaborado una estrategia nacional de ciberseguridad y ha llevado a cabo campañas de sensibilización pública sobre la ciberdelincuencia.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

El Poder Judicial de Surinam ha adquirido más autonomía desde el cambio de Gobierno y ha habido iniciativas para aumentar la capacitación, ha mejorado la remuneración y se ha ampliado la contratación. A pesar de estos avances, siguen existiendo retos, como la escasez de recursos y de personal, los retrasos en los juicios y la prolongación de la prisión preventiva. En el Poder Judicial hay tensiones

políticas, como las críticas a las políticas del Tribunal Supremo y las acusaciones de injerencia política. La Fiscalía General, que se centra en los delitos ambientales, la lucha contra el lavado de dinero y los delitos relacionados con las drogas, se enfrenta a retos, debido a los conflictos internos del Gobierno y a los retrasos en los nombramientos oficiales. Las condiciones de hacinamiento y de insalubridad de las prisiones, junto con las denuncias de abusos por parte del personal, debilitan aún más la integridad judicial.

En Surinam, los cuerpos de seguridad se enfrentan a graves problemas, debido a la falta de personal, a los bajos salarios y a la elevada carga de trabajo, lo que da lugar a una corrupción generalizada, que incluye el pedido de «tasas de paso» en los puestos de control y las multas desproporcionadas por pequeñas contravenciones. Las operaciones aduaneras se caracterizan por una grave falta de financiación, por la corrupción y por carecer del equipamiento adecuado, lo que pone en peligro la seguridad de los aeropuertos internacionales y requiere controles adicionales en los destinos extranjeros. Aunque no hay una unidad dedicada al crimen organizado, existen brigadas especializadas que se ocupan de los estupefacentes, del tráfico internacional de drogas, del control de los contenedores y de la trata de personas y durante este período se ha registrado un aumento de las investigaciones y de los procesamientos. Las iniciativas en materia de ciberseguridad incluyen la capacitación internacional y los planes para crear una unidad de ciberdelincuencia.

Surinam se enfrenta a graves dificultades para mantener su integridad territorial, debido a la porosidad de sus fronteras y a que no están bien protegidas. Asimismo, el hecho de que el país esté situado en las principales rutas del tráfico de cocaína lo convierte en un lugar de tránsito crucial para los mercados ilícitos. En las fronteras con Guyana y con la Guayana Francesa se registran muchos cruces ilegales, mientras que la falta de un puesto oficial en la frontera con Brasil agrava las vulnerabilidades. Como las regiones meridionales carecen de vigilancia, la población es escasa y los territorios interiores están desprotegidos, los grupos delictivos extranjeros y los locales se dedican al contrabando de cocaína y de armas. Los cuerpos de seguridad se enfrentan a una corrupción sistémica, a recursos limitados y a restricciones presupuestarias en medio de una crisis económica, lo que debilita considerablemente los esfuerzos de control fronterizo.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

En el país, el riesgo de lavado de dinero tiene un nivel medio-alto, principalmente debido a la reexpedición de cocaína hacia Europa, la extracción ilícita de oro y las transacciones en efectivo no reguladas, como las compras de oro y una industria de los casinos que se maneja con dinero en efectivo. A pesar de que el Gobierno actual ha tratado de mejorar la aplicación de las leyes contra el lavado de dinero, el país sigue siendo vulnerable, porque los recursos son limitados,

la tecnología está obsoleta y la coordinación entre los organismos es insuficiente. Si bien la unidad de inteligencia financiera ha mejorado la supervisión de los depósitos en efectivo, las instituciones financieras han presentado pocos informes sobre actividades sospechosas. Las deficiencias del equipo de investigación financiera dificultan la identificación y la investigación eficaces de los casos de lavado de dinero. Aunque se está promoviendo la legislación obligatoria contra este delito, su aplicación sigue siendo limitada.

La corrupción y el control estatal no dejan de limitar la economía, lo que restringe el crecimiento del sector privado y el desarrollo a largo plazo. El sector público domina el empleo y se invierte poco en la educación y la capacitación de la mano de obra. El sector extractivo, una fuente importante de inversión extranjera, adolece de licitaciones públicas opacas y de corrupción. La debilidad del Estado de derecho y la falta de legislación en materia de competencia obstaculizan aún más el progreso económico. Si bien los derechos de propiedad están protegidos por la Constitución, su aplicación es desigual, sobre todo en lo que respecta a la política agraria y a los contratos públicos. Los esfuerzos para reducir los impuestos especiales como estrategia para frenar los mercados ilícitos se ven obstaculizados por la inflación y la devaluación de la moneda.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

Los programas gubernamentales de apoyo a las víctimas se centran principalmente en la trata de personas y se ha creado un refugio temporal, financiado con fondos públicos. El Gobierno colabora con las organizaciones internacionales y las oenegés para facilitar el viaje seguro a terceros países de las víctimas extranjeras, aunque sigue faltando la asistencia para la repatriación. Se ha implementado un protocolo para los rescatistas de las víctimas de la trata en diversos organismos. Si bien la Oficina de Servicios a las Víctimas ofrece alimentos, alojamiento, atención médica y asesoramiento, faltan centros de atención especializados para los niños y los hombres adultos. La identificación de las víctimas ha disminuido, aunque existe una línea telefónica de atención contra la trata que funciona las 24 horas del día y en varios idiomas. La protección de la identidad de los testigos durante los juicios sigue siendo insuficiente.

Se han logrado avances en la prevención de la criminalidad, en particular en lo que respecta a la trata de personas y la caza furtiva de animales silvestres, pero persisten los problemas de aplicación de la ley, debido a las limitaciones institucionales. Las iniciativas de sensibilización pública, que incluyen folletos multilingües y campañas escolares, pretenden combatir la trata de personas, prestando especial atención a los grupos vulnerables, como las comunidades cimarronas autóctonas. Las iniciativas de prevención de delitos contra las especies silvestres se centran en la caza furtiva del jaguar, en colaboración con oenegés y con figuras públicas, pero la aplicación de la ley sigue siendo escasa. Los organismos estatales de vigilancia se enfrentan a limitaciones financieras y de recursos humanos. La corrupción y la remuneración insuficiente de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley aumentan su vulnerabilidad al soborno. Persiste la tala ilegal, a pesar de las iniciativas de vigilancia, agravada por la vasta selva tropical del país y la corrupción sistémica.

Los actores no estatales, como las oenegés y las comunidades cimarronas autóctonas, combaten activamente la criminalidad y la degradación medioambiental de Surinam, centrándose en la protección de la fauna silvestre y la prevención de la contaminación. El entorno mediático es, en general, abierto, ya que la Constitución garantiza la libertad de prensa y la pluralidad, pero presenta retos, como las limitaciones financieras y los ciberataques a los medios de comunicación, que ponen en peligro los archivos digitales y la integridad de los contenidos. El periodismo de investigación, especialmente en el sector aurífero, suele estar a cargo de periodistas extranjeros, debido a la reticencia local. Si bien el Gobierno por lo general es accesible, las estrictas leyes contra la difamación y la presión política ocasional impiden que haya información crítica. A pesar de las agresiones esporádicas contra periodistas y de los sesgos políticos, la participación de las oenegés en la formulación de políticas sigue siendo fuerte y el Gobierno no interfiere.

Este resumen ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, los hallazgos y las conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.